

C.A. de Santiago

Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Juan Pablo Solorza Kojakovic, abogado, en representación de **Compañía General de Electricidad S.A.**, sociedad de giro de distribución de electricidad, y según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley N°18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, deduce reclamación de ilegalidad en contra de las **Resoluciones Exentas N°11960 de 26 de abril de 2022 y N° 35437 de 29 de agosto de 2022, ambas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles**, por haber la primera aplicado a su parte una multa de 3.800 Unidades Tributarias Mensuales, y la segunda por haber rechazado su recurso de reposición en contra de la sanción aludida, por lo que solicita a esta Corte que, acogiendo el presente reclamo, deje sin efecto dichas resoluciones, absolviendo a la recurrente del cargo único formulado en su contra, o en subsidio rebaje significativamente el monto de la multa impuesta, con costas.

En cuanto a los antecedentes señala que la Superintendencia de Electricidad y Combustible, haciendo uso de sus potestades de fiscalización, procedió a revisar la información respecto del proceso de interrupciones de servicio individualizado “Interrupciones 2018” para el periodo que comprende de enero a diciembre del año 2020, en la comuna de Curarrehue, Región de La Araucanía, y en ese contexto, habría detectado que la Compañía reclamante sobrepasó el límite máximo del indicador de “tiempo de interrupción por cliente” o SAIDI (por sus siglas en inglés), establecido en la



normativa sectorial vigente, en diversas comunas del país. Producto de lo anterior, la SEC formuló 6 cargos en su contra, cada uno notificado en oficios independientes y que corresponden a diferentes comunas y regiones del país, los que se fundamentan en el presunto incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y 72-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, calificando la supuesta infracción como “gravísima”, de acuerdo con el artículo 15 N° 4 de la ley 18.410, en virtud de la cual aplicó una multa de 3.800 UTM y, posteriormente, conociendo de la reposición, igualmente la rechazó, mediante la RE 35437 de 29 de agosto de 2022, manteniendo íntegramente la referida sanción.

Refiere que en cuanto a sus descargos, en síntesis, no se negó la ocurrencia de la infracción en la comuna afectada, reconociendo además haber sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente en la comuna de Curarrehue; sin embargo no ha quedado indiferente frente a dicha situación, muy por el contrario, tal como ha sido expuesto a la Superintendencia en numerosas y diversas reuniones y comunicaciones, su representada se ha comprometido y ejecutado durante los últimos años un importante plan de gestiones de mantenimiento e inversiones con el propósito de mejorar cuantitativamente la calidad del suministro que entrega a sus clientes, que siempre ha estado su parte por mejorar la calidad del servicio de distribución eléctrica que ofrece a sus clientes y esto ha sido conocido por la SEC, ya que se le han informado los diversos planes de acción, inversión e iniciativas que la Compañía



ha adoptado para mejorar y mantener la infraestructura eléctrica en buen estado. En este sentido, destacando que cumplió con la elaboración de un acabado “Plan de Evaluación de la Integridad de la Calidad de Servicio” que buscaba evitar indisponibilidades de suministro de electricidad o en su defecto propender a la restitución del servicio en un breve plazo, así como también la elaboración de un Plan de Contingencia y aplicación ante la ocurrencia de cualquier evento de la naturaleza, climático o derivado de fallas y/o desconexiones que afecten la continuidad de suministro de electricidad a usuarios finales, sean o no de responsabilidad de CGE.

En cuanto a los fundamentos de su reclamación, en primer término estima que Superintendencia impone una sanción gravísima que no está determinada o correctamente tipificada en una norma de rango legal, ya que en este caso concreto, la sanción aplicada por la autoridad tiene como base legal la norma que regula la calidad del servicio de distribución en el artículo 130 de la LGSE, que establece la siguiente conducta: *“La calidad de servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos”*.

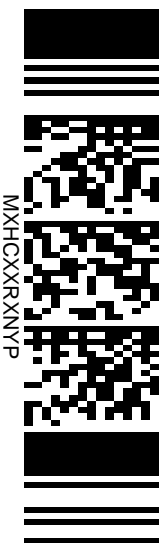
En ese sentido, el estándar de conducta que exige la norma a CGE, como empresa distribuidora de servicio público, es operar con una calidad de servicio que corresponda a *“estándares normales con límites máximos de variación”* según lo que determinen los “reglamentos”, pero que en la especie los parámetros de dicha



conducta son tan amplios e indeterminados en la ley, que no permiten a las empresas distribuidoras identificar cómo o cuándo dejan de cumplir un estándar normal, bajo los límites máximos, así el legislador ha previsto únicamente que se determinen a través de reglamentos, esto es, mediante decretos expedidos a través del Ministerio de Energía.

Añade que, sin perjuicio de lo anterior, en el caso de autos, la definición de “normalidad” o “anormalidad” de la calidad del servicio de distribución se especificó en una simple norma técnica, dictada por la Comisión Nacional de Energía o CNE sin respetar por consiguiente el principio de tipicidad. Que en este punto, resulta esencial considerar que el artículo 19 N° 3 de la Constitución establece que *“corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”*, siendo así que en contravención a la referida garantía la reclamada aplicó a su estándares contenidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, que es una norma aprobada por una mera resolución de la CNE, exenta del trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República, y por lo tanto no cumple con tener la naturaleza jurídica de un reglamento, de acuerdo con lo que establece expresa y exclusivamente el artículo 130° de la LGSE antes reseñado, para la definición del estado normal y los límites máximos variación de la calidad del servicio de distribución.

Que como segundo fundamento alega una errada calificación de la infracción como “gravísima”, de acuerdo con el artículo 15 N°4 de la ley 18.410, por cuanto en dicha norma se dispone, en lo pertinente *“Son infracciones gravísimas los hechos, actos u*



omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente: 4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora.”

Así en este punto el ordenamiento sectorial, establece que para atribuir a la infracción el carácter de gravísima, la conducta debe reunir copulativamente dos requisitos: primero, alterar la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y; segundo, afectar a lo menos el 5% de los usuarios abastecidos por la infractora, siendo el texto de la ley claro al indicar “*usuarios abastecidos por la infractora*”, sin añadir una calificación adicional, restrictiva a un espacio geográfico, tampoco permitiéndose en la norma un espacio discrecional de calificación para que la autoridad pueda complementar, caso a caso, la base o el universo de cálculo de los clientes para obtener el porcentaje antes aludido.

Afirma que la Compañía General de Electricidad al 31 de diciembre de 2020 contaba con un número total de usuarios de 3.066.920, siendo ese el guarismo que de acuerdo al artículo 15 N° 4, que debe ser considerado para efectos de calcular el porcentaje de usuarios afectados por una afectación en la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio, lo que en el caso de autos no ocurrió, ya que la Superintendencia sancionó a su parte considerando solamente a los clientes afectados en las respectivas comunas individualizadas en las distintas comunas, según cada Oficio y posterior Resolución Exenta, lo que implica una interpretación extensiva de la norma, prescindiéndose de lo

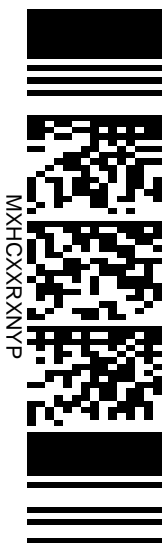


expresamente consignado en ella, lo que se tradujo en una determinación mayor de usuarios afectados y por lo tanto un porcentaje mayor al 5 %, correspondiendo -asegura- en realidad a un 0,1%.

Como tercera ilegalidad plantea la infracción del principio “*non bis in ídem*”, comprendido como principio básico del derecho administrativo sancionado, en cuanto existe la prohibición de sancionar o agravar la sanción múltiples veces, respecto de una misma conducta en la que se aprecie una identidad en el sujeto supuestamente infractor, en el hecho y en el fundamento.

Sostiene que el supuesto anterior se puede apreciar debido a que la transgresión del indicador SAIDI que se le atribuye, se utiliza por la SEC para sancionarla en diversas comunas del país, y además para calificar la infracción como gravísima, y al momento de resolverse la reposición presentada, nuevamente se usa la disgregación de multas y comunas, para invocarla como un elemento calculador del quantum de las mismas al señalar que “*En el proceso correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2020, la empresa es reincidente en cuanto al incumplimiento del SAIDI, lo que fue tenido en cuenta para determinar en el monto de la multa aplicada*”. En otras palabras, se utiliza el mismo hecho para sancionar múltiples veces, calificar la conducta como “gravísima” y además para determinar el quantum de la multa, lo que se puede constatar en los expedientes de los procesos sancionatorios instruidos por la SEC, iniciados mediante:

(i) Oficio Ordinario N° 91884, y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11957;



(ii) Oficio Ordinario N° 91885 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11958;

(iii) Oficio Ordinario N° 91886 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N°11959;

(iv) Oficio Ordinario N° 91887 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11960;

(v) Oficio Ordinario N° 91889 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11963; y

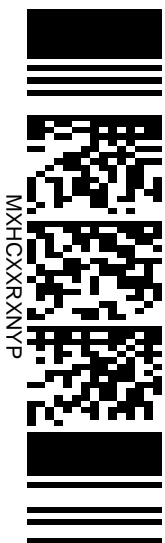
(vi) Oficio Ordinario N°91890 y con aplicación de una multa a CGE mediante la Resolución Exenta N° 11964.

En cuarto lugar, la RE 11960 ha sido dictada con una clara contravención al principio de proporcionalidad y ello como consecuencia de las infracciones a los principios constitucionales de legalidad y *non bis in ídem*, pues la multa resulta muchísimo más drástica para CGE, al calificar la infracción como gravísima, considerando que el acto aludido como referencia para indicar la capacidad económica de su representada, se refiera a su Memoria Anual del año 2021, cuando la sanción fue aplicada durante el 2020 que fue el año con más dificultades y repercusiones en los estados financieros para la gran mayoría de las empresas del país, en que ocurrió la más importante crisis sanitaria a nivel mundial, provocando la suspensión de la aplicación de tarifas, y entre otras medidas, se ha dictado la Ley 21.249, cuya vigencia fue prorrogada mediante la Ley 21.301, que establece una serie de beneficios en favor de los usuarios de los servicios básicos, dentro de los cuales están los clientes finales de CGE, impidiendo el corte de los suministros por deuda durante 270 días y la posibilidad de pactar el pago de las deudas de suministro de estos servicios, devengadas



entre el 18 de marzo de 2020 y el 5 de mayo de 2021, hasta en 36 cuotas, sin multas, intereses, ni gastos asociados. Agregando que, en efecto, esta multa, por su magnitud, es completamente alejada al contexto político, social y económico y, en especial, a los grandes esfuerzos presupuestarios o patrimoniales que de diversas formas se han impuesto a la recurrente de ilegalidad, en su situación de concesionaria de servicio público eléctrico en beneficio de usuarios, clientes o consumidores finales, siendo absurdo que se argumente la aplicación de una multa elevada simplemente por su presencia en el mercado eléctrico nacional, constituyendo la proporcionalidad un aspecto técnico de la razonabilidad y se vincula con la entidad de la sanción que se impone, todo lo que se ve reflejado de la redacción del artículo 16 de la Ley 18.410, el que establece: *“Para la determinación de las correspondientes sanciones, se considerarán las siguientes circunstancias: a) la importancia del daño causado o del peligro ocasionado; b) el porcentaje de usuarios afectados por la infracción; c) el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción; d) la intencionalidad en la comisión de la infracción y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; e) la conducta anterior, y f) la capacidad económica del infractor, especialmente si se compromete la continuidad del servicio prestado por el afectado”*. Desarrollando en este apartado además lo pertinente en cuanto a la importancia del daño causado o del peligro ocasionado, el porcentaje de usuarios afectados por la infracción, y el beneficio económico obtenido por su parte con ocasión de la infracción.

Pide en consecuencia que se declaren ilegales las Resoluciones Exentas N°s 11960 y 35437 de la SEC por no ajustarse a la



Constitución, la Ley General de Servicios Eléctricos, sus reglamentos, la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución y demás disposiciones que le corresponde aplicar, dejándola en consecuencia sin efecto, que se absuelva a su parte del cargo formulado, condenándose en costas al servicio recurrido, pidiendo, en subsidio de lo anterior, rebajar proporcionalmente la multa establecida de 3.800 Unidades Tributarias Mensuales, en razón de lo dispuesto el artículo 16 de la Ley 18.410.

SEGUNDO: Que comparece la reclamada, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, evacuando informe en esos autos, solicitando se rechace el reclamo, al no existir ilegalidad alguna en el actuar de su parte.

Señala en primer término que las resoluciones de la Superintendencia tienen su fundamento en las funciones que le encomienda su normativa orgánica, contenida en la ley 18.410, cuyo artículo 2º previene que su objeto será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad, para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que las antes citadas operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituyan peligro para las personas o cosas y que, por su parte, el Título IV de dicha ley, la faculta para imponer las sanciones que en ella se indican por las infracciones a las leyes, reglamentos y demás normas relacionadas con electricidad, gas y combustibles líquidos, o en



incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas por el Servicio.

Que sin perjuicio de toda la normativa que resulta aplicable en autos y que transcribe, indica que con ocasión de haber recibido la información correspondiente a las interrupciones de suministro que afectan a las redes de distribución de cada una de las concesionarias, la Superintendencia, a través del Oficio ORD. N° 91887, de fecha 26 de octubre de 2021, formuló cargos a la Compañía General de Electricidad S.A., del siguiente tenor: *“Incumplimiento de lo establecido en el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, en relación con los Artículos 145° y 221° del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en relación a los artículos 72°-14 y 130° de la Ley General de Servicios Eléctricos, lo que se desprende de la información aportada por la empresa en el proceso denominado “Interrupciones 2018”, la cual indica que se ha sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente, en la comuna señalada en el punto 4 del presente oficio”*. Agrega que, al respecto, y dentro del plazo otorgado a la reclamante de ilegalidad para presentar sus descargos, la Compañía General de Electricidad evacuó el trámite aludido el 25 de noviembre de 2021.

Afirma que en la especie los antecedentes recabados fueron debidamente analizados y ponderados por el organismo fiscalizador, concluyendo que los mismos evidenciaban que correspondía hacer exigible la responsabilidad de CGE, respecto de las infracciones que le fueron imputadas, por lo que, a través de Resolución Exenta N° 11960, de 26 de abril de 2021, atendido el carácter gravísimo de las



infracciones constatadas, se le aplicó a la reclamante la sanción de multa equivalente a 3.800 Unidades Tributarias Mensuales, y que en contra de esa determinación, se dedujo reposición, para ser dejada sin efecto la multa o en subsidio rebajada sustancialmente, siendo tal recurso rechazado a través de Resolución Exenta N° 35437, de fecha 29 de agosto 2022, por no haberse aportado antecedentes adicionales distintos a los tenidos a la vista al emitir la primitiva resolución impugnada.

Respecto a las ilegalidades invocadas, señala que del expediente de investigación aparece con claridad que los hechos constitutivos de las infracciones sancionadas se encuentran debidamente acreditados y que contravienen las disposiciones invocadas en la formulación de cargos, sin que existan dudas por parte de la Superintendencia de la normativa aplicable a los hechos infraccionales, ni del sentido y alcance de dicha preceptiva.

Sostiene que, acorde con la información proporcionada por la propia recurrente a través del proceso “Interrupciones 2018”, definido en virtud de la Resolución Exenta N° 11960, de 26 de abril de 2021, se pudo acreditar que, en la Región de La Araucanía, en la comuna de Curarrehue, la empresa distribuidora sobrepasó el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente,

Destaca, que la recurrente, en sus descargos, no negó la ocurrencia de la infracción en la comuna afectada, reconociendo además haber sobrepasado el límite máximo del SAIDI establecido en la normativa vigente en la comuna de Curarrehue, según los antecedentes ya mencionados. Ello, es un claro reflejo de que las deficiencias por las que fue sancionada, en los términos atribuidos en la formulación cargos, por lo que resulta inadmisibile que ahora



pretenda desconocer la existencia de infracciones. Y, añade, que todas las alegaciones vertidas en los descargos fueron analizadas y ponderadas, descartándose la configuración de caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a la regulación aplicable.

Respecto a lo planteado por la reclamante de ilegalidad, en cuanto a .que la Superintendencia impone una sanción gravísima que no está determinada o correctamente tipificada en una norma de rango legal, reflexiona en concreto que las disposiciones que cita y transcribe en detalle reconocen y parten del supuesto, de que los estándares de calidad de servicio y de suministro, o las exigencias en la calidad de suministro, pueden estar dictadas en la respectiva norma técnica, debiendo realizarse una interpretación sistemática y teleológica de la normativa, siendo lo anterior evidentemente necesario, por cuanto en una materia eminentemente técnica, como es el desarrollo de los sistemas eléctricos, sus condiciones técnico-operativas, el estándar de calidad de servicio asociados a las mismas, y las exigencias relativas a la calidad de suministro son dinámicas y están en permanente evolución, debiendo ser reguladas en normas que permitan su pronta actualización.

En razón a lo anteriormente planteado, reflexiona, la normativa eléctrica se encuentra compuesta por una regulación heterogénea, que debe ser comprendida en su completitud, realizándose una interpretación sistemática y teleológica de la misma, no perdiendo de vista que los destinatarios de dicho precepto son actores que desarrollan una actividad económica monopólica, tarifada, de servicio público y que poseen un conocimiento técnico- especializado del sector en el que se desenvuelven.



En lo relativo a lo planteado acerca de que las resoluciones reclamadas serían ilegales porque incrementaría artificialmente el número de usuarios afectados en la comuna en la que se registró un exceso de SAIDI, precisa que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, separar la infracción de calidad de suministro por par comuna - empresa, nada tiene de arbitrario, como alega la reclamante, sino que tiene su fundamento en la Norma Técnica, la cual establece estándares aplicables para cada par comuna – empresa, y conforme al principio de economía procedimental del artículo 9 de la Ley 19.880, se decidió agrupar las infracciones a nivel regional respecto no solo del cargo formulado por los hechos ocurridos en la Región de La Araucanía y que motivan el presente recurso, sino que de los otros Oficios en el mismo sentido, con los cargos en contra de la Compañía reclamante de ilegalidad, por infracción y hechos suscitados en distintas regiones y comunas del país, respecto de los que igualmente ha recurrido de ilegalidad y que se encuentran a la espera de ser conocidos por esta misma Corte.

En cuanto a la calificación de la infracción como gravísima, señala que el ámbito geográfico que ha sido objeto de cada una de las investigaciones, está referido a la agrupación de comunas que



integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan para recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, no se han contravenido principios constitucionales ni legales, como alega la reclamante.

Señala además en este punto que debe igualmente ser rechazada la alegación de infracción al principio de non bis in ídem, por cuanto se ha sancionado por hechos ocurridos en diversas comunas de las distintas regiones del país, constituyéndose así cada hecho como distinto y por lo tanto no existe el supuesto planteado en tal sentido.

Indica que el porcentaje de usuarios afectados se calcula teniendo consideración cada comuna afectada en particular servida por la empresa infractora y no el universo total que abastece esa entidad, y que se tuvo en cuenta la duración de las interrupciones de suministro de responsabilidad de la empresa, en lo que dice relación con el presente reclamo, en la comuna de Curarrehue, en la Región de La Araucanía, lo que evidencia una situación particularmente gravosa.

En lo atinente al monto de la multa y su proporcionalidad, señala que la resolución impugnada ponderó todas las circunstancias que contempla el artículo 16 de la Ley N° 18.410, en particular las invocadas por la reclamante, según consta aparece de lo razonado en los actos administrativos respectivos, que condujeron a fijar el

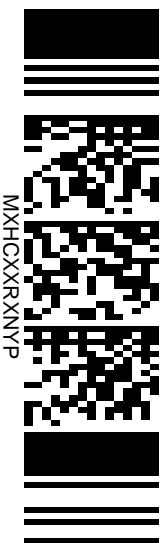


valor que en definitiva se aplicó y no uno mayor o menor, atendida la gravedad de las infracciones.

En cuanto al porcentaje o número de usuarios afectados por la infracción, indica que las interrupciones han alterado la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas, afectando a los usuarios abastecidos por la reclamante en la comuna ya individualizada, en un porcentaje mayor al 5%, concluyéndose en el caso de que se trata que la infracción era gravísima en los términos del artículo 15 N° 4), de la Ley N° 18.410, puesto que la infracción, además reconocida por CGE, ha afectado al 56% de los usuarios abastecidos por la empresa.

Sostiene que se ponderó la capacidad económica de la reclamante, dejando asentado la resolución que la ejecución, operación, mantenimiento y administración de proyectos eléctricos de distribución de la envergadura de los que posee, requieren de altas inversiones y gastos, y dan cuenta de una empresa robusta en términos financieros. Añade, que la capacidad económica de la reclamante se ve reflejada en su última Memoria Anual 2021 y Estado de Resultados, por lo que la sanción no compromete su operación.

En lo referente a la afectación del principio de proporcionalidad alegado, arguye que la resolución se encuentra debidamente fundada y aplica todos los parámetros normativos para determinar la sanción y su quantum, particularmente considerando la idoneidad y necesidad de la medida impuesta, al no existir otro medio para exigir el cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente y aplicando una sanción dentro de los límites establecidos, la cual se ha justificado suficientemente.



Destaca que es la ley la que establece los rangos dentro de los que pueden fluctuar las multas que aplique la Superintendencia, los que han sido respetados por la resolución, no siendo desproporcionado el ejercicio de la potestad sancionadora en este caso, siendo improcedente la disminución de la multa que pide la recurrente. A este respecto, la Ley N° 18.410 establece que las infracciones gravísimas pueden ser sancionadas hasta en 10.000 Unidades Tributarias Anuales, es decir 120.000 UTM, por lo que la multa de 3.800 UTM aplicada, se encuentra dentro de rango. Añade que, si se analizan los 6 elementos que impone considerar el artículo 16 para determinar una sanción, 5 de ellos tenían un impacto particular, esto es, la cuantía del daño generado a los clientes regulados, el beneficio percibido por la empresa, el porcentaje de usuarios afectados de la empresa en las comunas en donde se comprobó la infracción, que tiene conocimiento de sus obligaciones, y su excepcional capacidad económica, todo lo cual justifica la cuantía de la multa aplicada.

Sostiene que la Superintendencia se ha ajustado a la legalidad y a los antecedentes recabados o hechos valer durante la investigación, respetándose el debido proceso, formulándose cargos precisos, permitiéndose el derecho de defensa y atendiendo las alegaciones de la fiscalizada, sin que los fundamentos esgrimidos por la reclamante aporten elementos que pudieran poner en duda la existencia de la infracción.

TERCERO: Que, en síntesis, de los antecedentes del reclamo, se advierte que resultan ser hechos no controvertidos en el conocimiento de la presente acción:



1. Que mediante Oficio Ordinario Electrónico N° 91887, de 26 de Octubre de 2021 la reclamada formuló cargos a la Compañía General de Electricidad S.A. por haber incumplido los estándares de calidad de suministro que establece el artículo 4-2 de la Norma Técnica de Calidad de Servicios de Distribución, en relación con los artículos 145 y 221 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos y, a su vez, en vinculación con los artículos 72-14 y 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, al haber excedido uno de los índices de continuidad de suministro vigente (tiempo medio de interrupción por cliente, SAIDI), para el período enero a diciembre de 2020, en la comuna de Curarrehue de la Región de La Araucanía, imputando la infracción de la normativa precedentemente aludida.

2. Que el día 25 de noviembre de 2021 la reclamante presentó sus descargos, rechazando las imputaciones de la Superintendencia.

3. Que el 26 de abril de 2022 se dictó la Resolución Exenta por la que se sanciona a la reclamante de ilegalidad al pago de una multa equivalente a 3.800 Unidades Tributarias mensuales.

4. Que con fecha 10 de mayo de 2022, la sancionada interpuso recurso de reposición en contra del respectivo acto terminal, resolviéndose por la Superintendencia de Electricidad y Combustible el 29 de agosto de 2022, mediante Resolución Exenta N° 35437 rechazar la reposición planteada y con ello manteniéndose la sanción ya referida.

CUARTO: Que, en cuanto al marco legal aplicable para el conocimiento de este recurso de reclamación, es dable señalar que se trata de un recurso de derecho estricto, en el que no se pueden



modificar los presupuestos fácticos acreditados en sede administrativa, sino analizar la legalidad del actuar de la recurrida y si este se encuentra conforme al ejercicio de sus facultades conforme a la legislación vigente. Tal ha sido el criterio sustentado por la Corte Suprema en causa Rol N° 99506-2020, al señalar en su considerando sexto que *“...el reclamo de ilegalidad en análisis constituye un mecanismo de revisión de la actividad administrativa sancionadora sectorial eléctrica, que tiene como principal característica ser de derecho estricto, es decir, su finalidad se restringe a la revisión de la juridicidad, tanto adjetiva como sustantiva, del actuar de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, sin que sea posible por esta vía variar los presupuestos fácticos que fueron determinados en sede administrativa”*, agregando en el motivo octavo *“Como consecuencia de aquella restricción, en la revisión de un procedimiento administrativo sancionatorio el órgano jurisdiccional sólo podrá alterar la intensidad del castigo cuando la Administración haya omitido toda fundamentación respecto los parámetros que la ley prescribe para su determinación concreta, o cuando los motivos explicitados en el acto para tal fin no se condicen con los hechos asentados en el sumario que le dio origen.”*

QUINTO: Que, para el adecuado análisis y decisión del reclamo deducido, resulta conveniente recordar las normas que conforman el ordenamiento eléctrico, por cuya observancia debe velar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, con arreglo a lo establecido en el artículo 2° de su Ley Orgánica 18.410 de 1985, que le encomienda la función de fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias y normas



técnicas sobre generación, producción, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos, gas y electricidad para verificar que la calidad de los servicios que se presten a los usuarios sea la señalada en dichas disposiciones y que tales operaciones y el uso de los recursos energéticos no constituya un peligro para las personas o cosas.

De acuerdo al artículo 3° N° 34 de la ley 18.410, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles está facultada para aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias, en cuyo cumplimiento le corresponde vigilar e impartir instrucciones de carácter general a las empresas y entidades sujetas a su fiscalización. A su vez, el artículo 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el D.F.L. N° 4/20018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 1 de 1982, de Minería, dispone: *“La calidad de servicio de las empresas distribuidoras de servicio público que operen en sistemas cuyo tamaño es superior a 1.500 kilowatts en capacidad instalada de generación, en cuanto a tensión, frecuencia, disponibilidad y otros, corresponderá a estándares normales con límites máximos de variación que serán los que determinen los reglamentos”*. En concordancia con la norma citada, la letra e) del artículo 323 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, aprobado por Decreto N° 327, de 1997, de Minería (en adelante, Reglamento Eléctrico), establece: *“Las infracciones e incumplimientos de las normas legales, reglamentarias y técnicas en materia de electricidad, como asimismo de las instrucciones y órdenes que imparta la Superintendencia, serán castigados con alguna de las sanciones*



establecidas en el reglamento de sanciones, sin perjuicio de otras contempladas en el ordenamiento jurídico. Entre otras, serán sancionadas las siguientes infracciones e incumplimientos: e) El incumplimiento de los estándares de calidad de servicio y suministro, establecidos por disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, para las actividades de generación, transmisión y distribución”.

Por su parte, el número 4) del inciso tercero del artículo 15 de la ley 18.410 señala: *“Son infracciones gravísimas los hechos, actos u omisiones que contravengan las disposiciones pertinentes y que alternativamente: 4) Hayan alterado la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo, más allá de los estándares permitidos por las normas y afecten a lo menos al 5% de los usuarios abastecidos por la infractora”.*

Para el caso en estudio, el artículo 145 del Reglamento Eléctrico prescribe: *“Las empresas concesionarias de servicio público de distribución deberán suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las excepciones legales y reglamentarias”.*

De esta manera, el artículo 221 del mismo reglamento dispone: *“Los concesionarios de servicio público de distribución son responsables del cumplimiento de los estándares y normas de calidad de servicio que establece la ley y este reglamento. Todo aquel que proporcione suministro eléctrico, tanto en generación, transporte o distribución, sea concesionario o no, será responsable del cumplimiento de los estándares de calidad de suministro que establecen este reglamento y las normas técnicas pertinentes”;* y la letra h) del artículo 222 del citado cuerpo normativo define: *“La*



calidad de servicio es el conjunto de propiedades y estándares normales que, conforme a la ley y el reglamento, son inherentes a la actividad de distribución de electricidad concesionada, y constituyen las condiciones bajo las cuales dicha actividad debe desarrollarse. La calidad de servicio incluye, entre otros, los siguientes parámetros: h) La continuidad del servicio”.

De igual modo, debe tenerse presente el artículo 72-14 de la Ley General de Servicios Eléctricos, señala que: *“Los coordinados serán responsables individualmente por el cumplimiento de las obligaciones que emanen de la ley, el reglamento, las normas técnicas que dicte la Comisión y de los procedimientos, instrucciones y programaciones que el Coordinador establezca”.*

Por su parte, el artículo 72-19 de la misma ley establece que la Comisión Nacional de Energía *“...fijará, mediante resolución exenta, las normas técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento de dicho sector. Para ello, anualmente, establecerá un plan de trabajo que permita proponer, facilitar y coordinar el desarrollo de éstas”.*

Igualmente, por Resolución Exenta N° 706, de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, se aprobó “Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución”, que establece las nuevas obligaciones para las compañías de distribución, en la que se aborda principalmente las interrupciones de suministro eléctrico y mejora la calidad de la información que dichas compañías entregan a los clientes. Así, en su artículo 1-1 relativo a los “Objetivos” señala *“Según lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, en adelante la “Ley”, el objetivo general de la*



presente norma técnica, en adelante e indistintamente “NT”, es permitir el correcto funcionamiento de sector eléctrico, para lo cual deberá regular los aspectos técnicos, de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento de dicho sector. En particular, la presente NT tiene como objetivo principal establecer las exigencias y estándares de Calidad de Servicio para los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica. De esta manera, en la presente NT se establecen las exigencias que deberán cumplir los concesionarios de servicio público de distribución de electricidad y las empresas que sean propietarias, arrendatarias, usufructuarias o que operen, a cualquier título, instalaciones de distribución de energía eléctrica, ambas en adelante e indistintamente “Empresa(s) Distribuidor(as)” o “Distribuidora(s)”, respecto de: 1. La Calidad de Producto. 2. La Calidad de Suministro. 3. La Calidad Comercial. ...”.

El artículo 1-3 sobre “Abreviaturas”, en su numeral 30 indica que SAIDI corresponde a la *“Tiempo medio de interrupción por Cliente (en inglés System Average Interruption Duration Index)”*, y el numeral 31 señala que SAIFI corresponde a *“Frecuencia media de interrupciones por Cliente (en inglés System Average Interruption Frequency Index)”*.

Por su parte, el artículo 4-2 sobre “Interrupciones de Suministro Globales” indica que *“De acuerdo a la Clasificación de Redes establecida en el Anexo de la presente NT, los indicadores SAIDI y SAIFI no deberán superar los límites siguientes durante cualquier periodo de doce meses consecutivos”*, estableciendo para el indicador SAIDI, desde el año 2020 en adelante, los siguientes límites en horas: para densidad de la red alta, 5 horas; para



densidad de la red media, 7 horas; para densidad de la red baja, 9 horas; y, para densidad de la red muy baja, 14 horas.

SEXTO: Que, se debe tener presente que conforme lo informado por la autoridad administrativa, en uso de sus facultades fiscalizadores y con la propia información proporcionada por la Compañía recurrente de ilegalidad, se estableció que, durante el período que abarca desde el mes de enero al mes de diciembre de 2020, esta última sobrepasó el límite máximo del índice SAIDI en la comuna de Curarrehue, en la Región de La Araucanía, esto es, el tiempo medio de interrupción del suministro eléctrico por cliente, según se ha detallado.

SÉPTIMO: Que, como primer reproche, sostiene la reclamante que las Resoluciones Exentas N°11960 de 26 de abril de 2022 y N° 35437 de 29 de agosto de 2022, infringen el artículo 130 de la Ley General de Servicios Eléctricos, imponiendo una sanción, además, gravísima que no está determinada o correctamente tipificada en una norma de rango legal.

La segunda ilegalidad se habría cometido al incorporar, al momento de calificar y graduar la sanción cuestionada, a usuarios no afectados en la calidad y continuidad del suministro eléctrico, infringiendo el numeral 4) del inciso tercero del artículo 15 y la letra b) del inciso segundo del artículo 16, ambos de la ley 18.410, que la obligaban a computar solo a los usuarios afectados.

La tercera ilegalidad se verificaría al infringirse el principio de *non bis in ídem*, utilizando un mismo hecho para sancionar múltiples veces, calificar la conducta como “gravísima” y además en virtud de ello determinar el quantum de la multa.



La cuarta ilegalidad se configura en tanto se impone la sanción primitiva con una clara infracción al principio de proporcionalidad.

En subsidio, solicita la rebaja sustancial de la multa impuesta.

OCTAVO: Que, en cuanto al reproche esgrimido por la reclamante consistente en la falta de tipicidad legal, es preciso atender a la naturaleza jurídica misma del derecho sancionador administrativo. Así, la doctrina nacional lleva tiempo discutiendo sobre si las sanciones que por mandato legal puede imponer la Administración del Estado a los particulares son expresión de un único poder del Estado para aplicar sanciones (*ius puniendi estatal*) (Bordalí Salamanca, Andrés, El debido procedimiento administrativo sancionador, *Revista de Derecho Administrativo Económico*, No. 37 (enero a junio 2023), pp 33-66. De ahí, desde la perspectiva de que sanciones administrativas serían una manifestación de ese *ius puniendi*, parte importante de la doctrina y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han sostenido que se deben aplicar al procedimiento por medio del cual se decretan, las garantías penales sustantivas que reconoce el sistema constitucional chileno. No obstante, otro sector de la doctrina ha señalado que la sanción administrativa no es expresión del *ius puniendi*, sino una actividad de *enforcement* o *compliance*, con el objetivo de que los fines de interés público de los que es portadora la Administración del Estado, puedan conseguirse; no siendo pertinente aplicar las garantías penales sustantivas con la misma profundidad en materia administrativa, ya que se trata de una actividad diversa a la punitiva. Así, el ilícito debe señalarlo la ley, pero la conducta reprochable puede ser



completada por normativas de rango inferior al legal –por ejemplo Reglamentos, normas técnicas- especialmente como en el caso de autos, por tratarse de estándares técnicos cuyo detalle exige una flexibilidad que refleje las necesidades propias de esta materia, que por lo demás son aceptadas y conocidas por la recurrente en su calidad de concesionaria y experta, obligándose a cumplir sus deberes legales -indicados en la ley- que incluye la calidad y continuidad del servicio según las normas reglamentarias y técnicas.

Ahora bien, en lo concerniente a Resoluciones Exentas N°11960 de 26 de abril de 2022 y N° 35437 de 29 de agosto de 2022, consta en autos que se trata de actos administrativos motivados que fueron dictados por la autoridad recurrida conforme a sus facultades legales establecidas en la ley 18.410; que son el resultado de un procedimiento administrativo que se desarrolló de acuerdo a la ritualidad exigida por la normativa sectorial, instancia en que los hechos denunciados fueron debidamente constatados, teniendo en cuenta además que la propia recurrente reconoce tanto la suspensión del suministro eléctrico y el tiempo constatado.

Es relevante considerar, como lo establece la resolución impugnada, que las interrupciones que constituyen las infracciones sancionadas no fueron causadas por fuerza mayor o caso fortuito, sino que se produjeron en un “estado normal”, en los términos definidos en las disposiciones contenidas en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, considerando los recursos necesarios y suficientes para prestar el servicio de distribución eléctrica de acuerdo a las exigencias de calidad establecidas en dicha regulación.



De lo expuesto precedentemente y de los antecedentes que obran en estos autos, aparece que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al dictar las Resoluciones que por esta vía se impugnan, tomó en consideración las circunstancias contenidas en la normativa aplicable para los efectos de determinar la sanción que se impuso a la reclamante, descartando así la consecuencial vulneración de la garantía de proporcionalidad, toda vez que la multa aplicada, como ya se ha dicho, se encuentra en el rango dispuesto en la ley 18.410 para las infracciones gravísima, cuya sanción puede llegar hasta 10.000 Unidades Tributarias Anuales, es decir 120.000 UTM, por lo que la multa de 3.800 UTM aplicada, se impuso dentro del rango permitido por la ley, y en función con el cargo formulado.

Por lo tanto, sólo cabe concluir que la reclamada ha actuado con estricto apego a la normativa que la rige, descartándose, en consecuencia, este capítulo de ilegalidad denunciado por la reclamante; tanto respecto de la falta de tipicidad como respecto de la calificación de la infracción como gravísima.

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre esta materia, desechando la pretensión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad planteada por la recurrente ante el Excelentísimo Tribunal en autos rol fallo de Excmo. Tribunal Constitucional, de fecha 29 de marzo 2022, recaído en autos rol 11.374-2021.

NOVENO: Que, en lo que respecta a la segunda ilegalidad denunciada, consistente en que el acto impugnado incrementaría artificialmente el porcentaje de afectación al tomar como base de cálculo el número de usuarios afectados en la comuna en particular



en que se registró un exceso de SAIDI, en contravención a la normativa aplicable, se ha de tener presente que el ámbito geográfico que ha sido objeto de esta investigación, al igual que las demás en distintos lugares del territorio nacional, está referido a la comuna o agrupación de comunas que integran cada una de las regiones servidas por la empresa distribuidora en que se comprobó la interrupción del suministro más allá de los límites permitidos por la normativa vigente, afectando a los usuarios de esas comunas, que pagan por recibir un servicio seguro, continuo y de calidad, de manera que el exceso constatado en cada sector geográfico configura una infracción distinta y, por ende, separar la infracción de calidad de suministro por cada comuna o agrupación de comunas, nada tiene de arbitrario, como sostiene la actora.

El estándar exigible para la determinación del tiempo medio máximo de interrupción según densidad de la red es por comuna, para lo cual corresponde utilizar la clasificación comuna o “par comuna-empresa” y, en consecuencia, la evaluación se realiza a ese nivel, conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución, aprobada por Resolución Exenta N° 706 de 2017, de la Comisión Nacional de Energía, que dispone estándares aplicables para cada par comuna-empresa. Por ello, se ha determinado correctamente por la autoridad fiscalizadora que la infracción cometida por la reclamante ha afectado al 56% de los usuarios abastecidos por ella en la comuna de Curarrehue, alterando la continuidad del servicio más allá de los estándares permitidos por las normas.

Conforme a lo anterior, se desestimará la infracción del numeral 4) del inciso tercero del artículo 15 y de la letra b) del



inciso segundo del artículo 16, ambos de la Ley N° 18.410, denunciada por la reclamante.

DÉCIMO: Que, respecto de la tercera ilegalidad denunciada, es del caso señalar que, conforme aparece de los antecedentes, la recurrida no ha infringido el principio *non bis in ídem* denunciado por cuanto se ha sancionado por hechos ocurridos en diversas comunas de las distintas regiones del país, constituyéndose así cada hecho como distinto y por lo tanto no existe el supuesto planteado en tal sentido. Sobre esta materia, queda claro en autos que el porcentaje de usuarios afectados se calcula teniendo en consideración cada comuna afectada en particular servida por la empresa infractora y no el universo total que abastece esa entidad; y que para aplicar esta sanción específica, la fiscalizadora tuvo en cuenta la duración de las interrupciones de suministro de responsabilidad de la empresa, específicamente en la comuna de Curarrehue, en la Región de La Araucanía, no advirtiéndose una doble sanción por los mismos hechos ocurridos en la misma comuna, por lo cual no se vulnera el principio denunciado, descartándose el tercer capítulo del arbitrio.

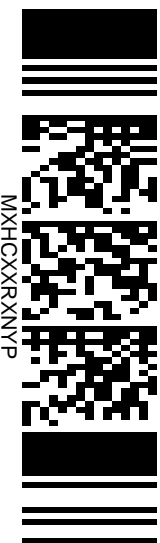
UNDÉCIMO: Que la cuarta infracción que se denuncia por la actora, relativa a la ausencia de proporcionalidad, como ya se ha dicho, se ha aplicado correctamente el artículo 15 N°4 de la Ley N° 18.410 ya transcrito, a lo que se suma que de la propia lectura del acto sancionatorio, aparece que la autoridad para determinar la cuantía de la multa ponderó todas las circunstancias establecidas en el artículo 16 de la citada ley, sin perjuicio que el indicador SAIDI considera, especialmente, la ubicación de la falla, la intensidad de la



misma y los recursos disponibles para la más pronta reposición del suministro.

En efecto, aparece del considerando 10° de la resolución impugnada, que se tuvo en cuenta la importancia del daño causado (letra a), del inciso segundo del artículo 16), referido precedentemente; el porcentaje o número de usuarios afectados por la infracción (letra b), del inciso segundo del artículo 16), que representan 56% de los usuarios abastecidos por la empresa recurrente en la comuna fiscalizada; el beneficio económico obtenido con motivo de la infracción (letra c), del inciso segundo del artículo 16), y atendido que la empresa no obtuvo beneficio, se dejó consignado en la resolución que por tal razón la sanción no era mayor; la intencionalidad y grado de participación de la empresa (letra d), del inciso segundo del artículo 16), para lo cual se consideró la tecnificación y especialidad de la actividad en que participa, el alto grado de conocimiento en el área, su conocimiento de los incumplimientos y la afectación y perjuicios ocasionados a los usuarios finales; la conducta anterior (letra e), del inciso segundo del artículo 16), atendida su condición de reincidente, al haber sido sancionada por incumplimiento del SAIDI para el período enero a diciembre de 2020; y la capacidad económica de la infractora (letra f), del inciso segundo del artículo 16), calificada como robusta financieramente, sobre la base de su Memoria 2021 y su Estado de Resultados, publicados en su sitio web y en el de la Comisión para el Mercado Financiero.

Por lo tanto, solo cabe concluir que la reclamada ha actuado con estricto apego a la normativa que la rige, descartándose, en consecuencia, la ilegalidad reprochada.

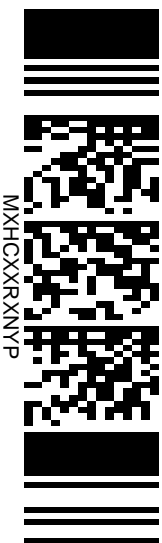


DUODÉCIMO: Que, asimismo, para la determinación de la calificación de la infracción como leve, grave o gravísima, el porcentaje de usuarios afectados se calcula considerando cada comuna afectada en particular servida por la empresa infractora y no el universo total que ella abastece. Por su parte, como ya se señaló, el conocimiento conjunto de todas las infracciones en un mismo procedimiento administrativo obedeció al principio de economía procedimental establecido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880.

En efecto, la infracción se construye independientemente para cada comuna, donde, por tanto, no estamos frente a una sola, ya que se requiere analizar la multiplicidad de interrupciones que la afecta.

De esta forma, para el caso en particular la infracción cometida por la Compañía General de Energía, ha afectado al 56% de los usuarios abastecidos por la reclamante en una comuna de la Región de La Araucanía.

DECIMOTERCERO: Que, en razón de lo expresado en los motivos precedentes, no resultan atendibles las peticiones subsidiarias de rebajar la multa, en razón de los argumentos planteados para fundar su impugnación de ilegalidad, y ello por cuanto no aparece como atendible atendido que se aprecia proporcionalidad entre cuantía que ha sido impuesta, los hechos que de que se trata y el grado de afectación que de aquello derivó a los usuarios que son abastecidos con el suministro eléctrico por la recurrente de ilegalidad, considerando en este punto igualmente que no se trató de un hecho único o aislado en una sola comuna del país, existiendo otros procesos y recursos vigentes en este mismo



sentido, sobre hechos acaecidos de la misma naturaleza en distintas comunas y regiones del país.

DECIMOCUARTO: Que, de acuerdo a lo expuesto, se concluye que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha regido su actuar conforme a la regulación pertinente en la materia, procedido dentro del ámbito de sus atribuciones, mediante actos fundados que informan adecuadamente los hechos que los motivan, señalando aquellos que constituyen transgresiones a la normativa vigente e indicando de manera precisa las disposiciones incumplidas, haciéndose cargo de cada una de las defensas hechas valer por la reclamante, respetándose el debido proceso, no avizorándose en consecuencia, ilegalidad en su actuar en la dictación de las Resoluciones Exentas N°11960 de 26 de abril de 2022 y N° 35437 de 29 de agosto de 2022, razón por la que el reclamo de ilegalidad formulado deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley N° 18.410, **se rechaza con costas**, el reclamo de ilegalidad deducido por don Juan Pablo Solorza Kojakovic, en representación de Compañía General de Electricidad S.A., en contra de las Resoluciones Exentas N°11960 de 26 de abril de 2022 y N° 35437 de 29 de agosto de 2022, dictadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

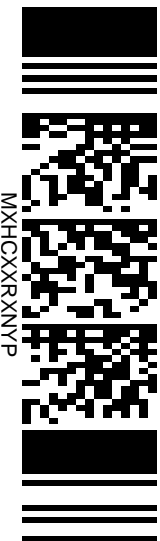
Redacción de la Abogada Integrante señora Vidaurre.



No firma el Ministro (S) señor Padilla no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.

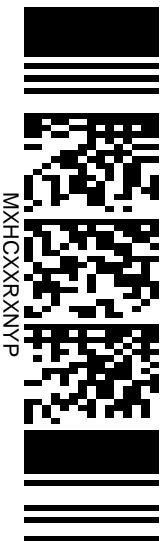
NºContencioso Administrativo-487-2022.

Pronunciada por la **Sexta Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Lilian Leyton Varela, conformada por el Ministro (S) señor Sergio Padilla Farías y por la Abogada Integrante señora Bárbara Vidaurre Miller.



Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogada Integrante Bárbara Vidaurre M. Santiago, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 03 de septiembre de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>